

SECRETARÍA GENERAL

Ref.: RA 02/2019

Área de Régimen Jurídico/hdp

D. Antonio Jesús Tocino de la Iglesia
(en nombre y representación de
FERROVIAL SERVICIOS, S.A.)
Paque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides nº 21
28050 Madrid

RESOLUCIÓN 3870/2019, DEL DIRECTOR-GERENTE DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL, POR LA QUE SE ESTIMA EL RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO POR D. ANTONIO JESÚS TOCINO DE LA IGLESIA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE FERROVIAL SERVICIOS, S.A., CONTRA EL ACTO DE LA MESA DE EXCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE DENOMINADO CONTRATO DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA BAJA, ALA DERECHA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS (EXPEDIENTE Nº A/OBR-008244/2019)

Visto el expediente relativo al recurso presentado por D. Antonio Jesús Tocino de la Iglesia en nombre y representación de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., se constatan los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- Con fecha 22 de mayo de 2019 se publica en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid el anuncio de licitación del expediente denominado CONTRATO DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA BAJA, ALA DERECHA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS (Expte.: A/OBR/-008244/2019).

SEGUNDO.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones y tras llevar a cabo los trámites previos de calificación de la documentación administrativa y evaluación de las ofertas presentadas, la Mesa de Contratación acuerda, en su sesión de 22 de agosto de 2019, elevar propuesta de adjudicación en favor de la empresa FERROVIAL SERVICIOS, S.A.

TERCERO.- Mediante escrito de 23 de agosto de 2019, notificado el mismo día a través del sistema NOTE, se requiere a FERROVIAL SERVICIOS, S.A., la documentación necesaria para llevar a cabo la adjudicación, concediéndosele un plazo de 7 días hábiles, a contar desde el envío de la comunicación, de forma que dicho plazo finalizaría el 2 de septiembre de 2019.

CUARTO.- La Mesa de Contratación, en su sesión de 6 de septiembre de 2019, acuerda excluir a FERROVIAL SERVICIOS, S.A., ya que no constaba la presentación de documentación alguna en plazo, de forma que únicamente obra en el expediente la constitución de la garantía definitiva, hecho éste que pudo comprobarse mediante el acceso al correspondiente sistema por parte de la unidad tramitadora del expediente, pero sin que mediara comunicación alguna por parte de la empresa licitadora.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0908660971327065606972**



Comunidad de Madrid

Como consecuencia de lo anterior, la Mesa de Contratación en la misma sesión de 6 de septiembre de 2019, acuerda elevar nueva propuesta de adjudicación en favor de ELECNOR, S.A., por estar situada en segundo lugar en el orden de las puntuaciones obtenidas en virtud de la aplicación de los criterios de adjudicación.

QUINTO.- La Mesa de Contratación, en su sesión de 18 de septiembre de 2019, analiza la documentación que tuvo entrada en el Órgano de Contratación con fecha de 10 de septiembre de 2019 presentada por parte de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., ratificando la exclusión acordada en la sesión anterior al considerar que la misma había sido presentada fuera de plazo.

En esta misma sesión, la Mesa de Contratación, da su conformidad a la documentación presentada por ELECNOR, S.A., como propuesta adjudicataria, sin que, hasta la fecha, se haya dictado la correspondiente Resolución de Adjudicación por encontrarse el expediente en trámite de adecuación de anualidades previo a la adjudicación.

SEXTO.- Mediante Resolución de 24 de septiembre de 2019, se acuerda la devolución de la garantía depositada por FERROVIAL SERVICIOS, S.A.

SÉPTIMO.- El 11 de octubre de 2019, D. Antonio Jesús Tocino de la Iglesia en nombre y representación de FERROVIAL SERVICIOS, S.A. presenta recurso de reposición contra el acto de la mesa de exclusión del referido procedimiento de licitación.

OCTAVO.- Mediante escrito de 23 de octubre de 2019, notificado el 25 de octubre por el sistema NOTE, y dada la condición de interesado de ELECNOR, S.A., se le da traslado del recurso al tiempo que se le comunica la apertura del correspondiente trámite de audiencia, a fin de que en el plazo de diez días hábiles pueda presentar las alegaciones o documentos que considere convenientes, así como si lo estima pertinente, tomar vista del expediente todo ello de conformidad con el artículo 118 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo no consta que la mercantil ELECNOR, S.A., haya presentado alegaciones.

NOVENO.- Consta en el expediente informe al respecto del Área de Contratación de 21 de octubre de 2019, que propone la estimación del presente recurso.

DÉCIMO.- Con fecha 20 de noviembre de 2019, se ha elevado propuesta de resolución por la Secretaría General de la Agencia de Vivienda Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La competencia para celebrar contratos relativos a las materias propias de la competencia del Organismo Autónomo y a ejercer cuantas facultades y competencias vengan atribuidas a los órganos de contratación por la legislación sobre contratos de las Administraciones Públicas y sus normas de desarrollo, corresponde al Director Gerente de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2 g) del Decreto 244/2015, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la organización, estructura y régimen de funcionamiento de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid en relación con el artículo 13 y 20 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid.





Comunidad de Madrid

El artículo 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que: *“Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley”*.

Según dispone el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: *“las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos”*.

Considerando que los actos de trámite anteriores a la adjudicación han de ser calificados como actos que no agotan la vía administrativa, deberán por tanto ser objeto de recurso de alzada y no de reposición, conforme al artículo 121.1. de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.

En el caso que nos ocupa, conforme establece el artículo 115.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, aunque el interesado ha calificado su escrito como recurso de reposición, *“el error en la calificación del recurso no ha de considerarse obstáculo a su tramitación una vez deducido su verdadero carácter”*, por lo que procede su tramitación como recurso de alzada.

De conformidad con la citada normativa, le corresponde al Director Gerente de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, la resolución del recurso de alzada interpuesto contra el acto de la Mesa de Contratación de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid por la que se acuerda la exclusión de la licitación de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., del procedimiento de licitación de referencia.

SEGUNDO.- La mercantil recurrente manifiesta su desacuerdo con la exclusión de la licitación, entendiendo que había constituido la garantía definitiva en el plazo concedido al efecto y que de haberle faltado alguna documentación, debería haber sido requerida, de conformidad con la cláusula 14 del PCAP.

TERCERO.- El procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del que trae causa el recurso, es el denominado abierto simplificado, cuyas especialidades, respecto al procedimiento abierto “ordinario”, se regulan en el artículo 159 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. No obstante, hay que destacar que en su último párrafo se expone claramente el carácter supletorio de las reglas de este procedimiento abierto en todo lo no previsto en el mencionado artículo para el simplificado, por lo que habrá de atender a estas previsiones para completar las lagunas que pudieran observarse en la tramitación del procedimiento abierto simplificado.

El artículo 159. 4 f) de la Ley 9/2017, establece en su apartado 4º:

4º.- *Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios de que hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato*





Comunidad de Madrid

conforme al artículo 76.2; y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación.

(...)

Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria en un plazo superior a 5 días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva.

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de 7 días hábiles establecido para presentar la garantía definitiva.

De lo anterior se infiere que la documentación a requerir al licitador propuesto sería la siguiente:

- Documentación relativa a la personalidad, representación, capacidad y solvencia: esta información podría extraerse, de oficio, de la inscripción en su caso de la empresa licitadora en el ROLECE, siempre y cuando dicha información obre en el Registro.
- Garanta definitiva: la cláusula 14ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en coherencia con lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, prevé que deberá presentarse la documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva en caso de que no se hubiera constituido en la Tesorería de la Comunidad de Madrid.
- Disposición efectiva de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76. 2 LCSP: la licitadora deberá presentar en el plazo indicado en el artículo 159.4 la documentación que se haya prevista en el PCAP necesaria para acreditar la disposición efectiva de los medios a los que se hubiera comprometido.

Por tanto, el requerimiento de la documentación acreditativa de las mencionadas circunstancias, deberá atenderse por parte de la empresa licitadora en el plazo de 7 días hábiles desde el envío del correspondiente comunicado, salvo lo que se refiere a aquella documentación que pudiera ser consultada de oficio y por medios electrónicos por parte del órgano de contratación (ROLECE y garantía definitiva si la misma se hubiera constituido en la Tesorería de la Comunidad de Madrid).

Visto lo anterior, mediante escrito de la unidad tramitadora del expediente de contratación enviado el 23 de agosto de 2019, se requiere a FERROVIAL SERVICIOS, S.A., para que presente la siguiente documentación:

- La que acredite la personalidad jurídica, capacidad de obrar, representación y clasificación o solvencia, salvo que ya los hubiera aportado en el procedimiento, o no se hubiera opuesto a la consulta de sus datos por medios electrónicos.





Comunidad de Madrid

- La documentación relacionada en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, según lo estipulado en la cláusula nº 14 del Pliego de Cláusulas Particulares, salvo que ya los hubiera aportado en el procedimiento, o no se hubiera opuesto a la consulta de sus datos por medios electrónicos.
- La acreditación de la constitución de la garantía definitiva por importe de 18.462, 13 euros.
- La documentación acreditativa de la disposición de medios que se han comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme al artículo 76 de la Ley 9/2017.

El requerimiento efectuado desde el órgano de contratación resultó acorde con lo previsto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público ya que se indicaba expresamente la innecesariedad de presentar aquella documentación si la misma podía obtenerse por medios electrónicos y siempre y cuando la empresa no se hubiera opuesto a su consulta, por lo tanto, partiendo de esta circunstancia y ciñéndonos a aquella documentación que sólo podría acreditarse mediante un acto positivo y expreso del licitador, hemos de centrarnos en la acreditación de la constitución de la garantía definitiva y en la documentación acreditativa de la disposición de medios.

CUARTO.- De la lectura del artículo 159.4 de la LCSP resulta claro que en el plazo de 7 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación, debería acreditarse, tanto la constitución de la garantía definitiva, como la disposición de los medios en los términos que se haya previsto en los pliegos. En este caso, el envío fue remitido el 23 de agosto de 2019, con lo que el plazo de presentación contado desde el envío, finalizaría el 2 de septiembre de 2019.

Dentro del plazo previsto, la empresa no presentó documentación alguna, si bien, pudo constatar por parte de la Mesa de Contratación, la constitución de la garantía definitiva en plazo. En este sentido, de la lectura de la cláusula 14ª del PCAP se deduce, a sensu contrario, que el órgano de contratación podrá acceder por medios electrónicos a la información relativa a la constitución de la garantía definitiva cuando ésta haya sido presentada en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, tal y como es el caso, de forma que no sería imprescindible que la empresa aportase documentación acreditativa alguna a este respecto. Por lo tanto, el requerimiento relativo a la constitución de la garantía definitiva habría sido atendida en plazo.

No sucede lo mismo con la documentación acreditativa que prevé el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en relación con la disposición efectiva de los medios, ya que transcurrido el plazo previsto, la empresa no aportó. En concreto:

- Declaración responsable firmada por el representante de la empresa en la que se relacionen las personas que componen el equipo de trabajo, CV firmado por los componentes del equipo de trabajo en los que se especifique la titulación y experiencia.
- Certificados expedidos o visados por el órgano competente que acrediten la experiencia mínima requerida, o en su defecto, declaración responsable del representante legal de la empresa.

QUINTO.- Sobre la posibilidad de otorgar plazo de subsanación para la cumplimentación del trámite relativo a la presentación de la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario, se ha pronunciado en diversas ocasiones, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en adelante TACRC).

En un principio, el TACRC había venido rechazando de plano la posibilidad de otorgar trámite de subsanación -así como de conferir una ampliación de plazo-, pudiendo destacarse, entre otras la resolución nº 1061/2017, en la que se pronunciaba en este sentido:





(...) este Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones un criterio contrario a la subsanabilidad de la documentación aportada por los licitadores en el trámite del artículo 151.2 del TRLCSP. Como se indicó, entre otras, en la Resolución 31/2015, de 10 de abril, “hemos declarado reiteradamente, por todas, en la Resolución 409/2014, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES Expte. TACRC 913/2017 C.A. 162/2017 que el citado plazo de diez días hábiles que establece el artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para aportar la documentación exigida en el mismo no puede ser rabasado, pues como ya señalamos entonces, de no ser así, ello supondría un punto de máxima inseguridad jurídica para el resto de los licitadores, con la consiguiente vulneración de los principios de publicidad, libre concurrencia y transparencia en la contratación, consagrados en los artículos 1 y 139 TRLCSP”.

Esta postura fue matizándose con el tiempo en supuestos relacionados con el cumplimiento de requisitos de aptitud si se había precedido de una declaración responsable durante la licitación o respecto a la garantía definitiva constituida en plazo sin haber sido acreditada documentalmente, si bien, con carácter general, este tribunal mantuvo el criterio de insubsanabilidad con rigor.

La mencionada posición sufre un giro radical en el año 2018 plasmada en su Resolución 747/2018, de 31 de julio, donde se admite, sin lugar a dudas este cambio favorable a la subsanabilidad. En este sentido, el TACRC indica en su fundamento de derecho sexto:

“se viene aplicando una interpretación literal, muy rigorista, extrema y muy amplia de su contenido, que debe ser de interpretación restrictiva a la vista de su carácter sancionador, que está llevando a resultados sumamente extensivos, formalistas e injustos. Esos criterios extremos se han aplicado incluso por este Tribunal, y por los Tribunales de Justicia, como por ejemplo, sobre si se admite o no la subsanación de defectos o errores u omisiones cometidos en la cumplimentación del requerimiento, que se niega por el simple hecho de que el precepto no dice nada al respecto, que ni lo prevé, ni lo prohíbe (...) Es preciso, por tanto, establecer una interpretación del artículo 151.1 del TRLCSP (art. 150.2 en la LCSP) más delimitada y acorde con el contenido literal del precepto y su finalidad, que no es otra que resolver situaciones de claro incumplimiento por parte del licitador mejor clasificado con transcendencia respecto de la garantía provisional, en el caso de que se hubiera constituido, y, en concreto, su incautación o, bajo la LCSP, imposición de una penalización del 3%, e incluso, incurrir en causa de prohibición de contratar, como prevé el artículo 60.2 a) del TRLCSP”.

El eje fundamental de la resolución se establece en torno a lo que ha de entenderse por correcta cumplimentación del trámite y en esta línea expone:

“Cumplimentar significa, según el DRAE, rellenar un impreso o poner en ejecución una orden superior. No significa cumplir perfectamente algo, en este caso lo requerido, sino simplemente poner en ejecución lo requerido, supuesto en el que existirá cumplimentación de lo ordenado, aunque no se haga perfectamente. El sentido anterior del texto citado deriva del hecho de que el precepto asocia una consideración determinada a la no cumplimentación, pero no a la cumplimentación aunque sea defectuosa o imperfecta. Y esa consideración no es que se rechace la oferta o se la excluya por no cumplimentar lo requerido el interesado, sino que se considera que el interesado ha retirado su oferta, efecto éste que no es el propio del cumplimiento defectuoso de trámites o, mejor dicho, de su cumplimentación defectuosa o imperfecta, ni en la Ley 39/2015, de PAC., ni en la TRLCSP, sino que la propia normativa de contratación pública lo vincula a la retirada expresa de la oferta, o a conductas de incumplimiento grave, que la ley equipara a aquella.../... Pues bien, la técnica de equiparar determinadas conductas a la retirada



Comunidad de Madrid

injustificada de la oferta se limita a incumplimientos totales de ciertas obligaciones, y si el requerimiento no se cumple, todo ello al fin de ejecutar la garantía por las causas citadas, por lo que en nuestro caso solo concurre cuando no se cumple en modo alguno lo requerido o no se constituye en modo alguno la garantía definitiva en el plazo señalado. Solo en tal caso, estaríamos ante incumplimientos de gravedad suficiente para afirmar que se ha retirado la oferta y procede la incautación y ejecución de la garantía provisional, pero no en otros casos, pues el efecto atribuido si se cumple defectuosamente lo requerido, ya no recaería sobre su no cumplimiento sino sobre su cumplimiento defectuoso, supuesto en el que no cabe afirmar retirada alguna de la oferta, y solo cabría, en buena técnica, excluir la oferta por incumplimiento del trámite, efecto gravísimo y perjudicial para el interés público ante una conducta de cumplimiento defectuoso no grave sin que previamente se dé la oportunidad, como se prevé en la Ley 39/2015, de subsanar el defecto u omisión cometido por el interesado en el trámite conferido. (...) El error es consustancial al ser humano, y resulta claramente desproporcionado rechazar de plano la mejor oferta seleccionada por no haber presentado perfectamente, en un primer momento, la numerosa documentación exigida”.

Su fundamento jurídico séptimo añade además como argumentos adicionales, las novedades del artículo 150.2 LCSP respecto del 151.1 TRLCSP, al pasar a regular expresamente el texto legal la posibilidad de acreditación del cumplimiento de los requisitos de aptitud en esta fase del procedimiento, entiende el TACRC que ello impone la obligación de otorgar el consabido plazo de subsanación de documentación administrativa de tres días hábiles: *“si frecuentemente los órganos de contratación exigen aportar en el sobre de la documentación administrativa una declaración responsable de que cumplen los requisitos previos o el DEUC, y que el propuesto como adjudicatario acredite antes de la adjudicación que cumple esos requisitos (artículo 146 del TRLCSP) es razonable pensar que su calificación se hará en ese momento, y si sus defectos y omisiones son subsanables si esa documentación se presenta antes, también habrá de serlo si se aprecian cuando se le requiere la documentación relativa a esos requisitos previos para adjudicarle el contrato, con la única particularidad de que ese plazo será el especial de la legislación de contratación pública, de tres días hábiles”.* Y en segundo lugar, la novedosa sanción de penalización del 3% del presupuesto base de licitación, que obliga, a juicio del TACRC, a extremar el principio de proporcionalidad: *“con la nueva LCSP el licitador que fracasa en este trámite no sólo pierde la posibilidad de que se le adjudique el contrato (siendo la empresa mejor valorada), sino que además se le puede imponer una penalidad del 3% del presupuesto base de licitación (entiende este Tribunal que la penalidad sólo procede cuando el incumplimiento de los requisitos para ser adjudicatario es grave y claro, y el licitador no ha actuado de buena fe y media dolo, culpa o negligencia). La existencia de esta penalidad hace necesario, más que nunca, que se conceda al licitador propuesto como adjudicatario la posibilidad de subsanar los errores cometidos al presentar su documentación”.*

En el supuesto concreto tratado en la Resolución, el TACRC llega a considerar subsanable la presentación incompleta de la garantía definitiva: *“Por otra parte, en nuestro caso concreto no cabe afirmar que no se ha cumplimentado el requerimiento relativo a la constitución de la garantía definitiva, ya que con arreglo al artículo 99.1 del TRLCSP el propuesto como adjudicatario debe acreditar en el plazo del artículo 151.2 haber constituido la garantía definitiva, lo que ha ocurrido en nuestro caso, aunque de forma incompleta, ya que el precepto exige constituir esa garantía, pero no excluye que se haga con defectos u omisiones, por lo que no cabe considerar no cumplimentado el trámite y entender retirada la oferta si se ha cumplimentado lo requerido, si bien defectuosamente, lo que excluye la falta de cumplimentación”.*





SEXTO.- Por lo anteriormente señalado, partiendo de la doctrina asentada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) desde el año 2018, puede considerarse que el requerimiento efectuado a FERROVIAL SERVICIOS, S.A., fue atendido defectuosamente o de forma incompleta, ya que según informa el Área de Contratación el 21 de octubre de 2019, el órgano de contratación pudo comprobar, tanto los requisitos de capacidad y solvencia a través del ROLECE, así como la constitución de la garantía definitiva, tal y como sí hizo, ya que fue constituida en tiempo y forma. Desde este punto de vista, debió otorgarse el oportuno plazo para subsanar los defectos detectados y que, en este caso, parecen ceñirse a la presentación de la documentación acreditativa de la disposición de medios.

Vistas las normas anteriormente citadas, y demás disposiciones de pertinente aplicación, y de conformidad con la Propuesta de Resolución elevada por la Secretaría General el 20 de noviembre de 2019, esta Dirección Gerencia

RESUELVE

Primero.- Estimar el recurso de alzada interpuesto por D. Antonio Jesús Tocino de la Iglesia en nombre y representación de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., contra el acto de la mesa de exclusión del procedimiento de licitación relativo al expediente denominado contrato de obra de reforma y acondicionamiento de la Planta Baja, ala derecha de la sede principal de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a adjudicar por procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios (Expte.: A/OBR-008244/2019)

Segundo.- Anular el acuerdo de exclusión adoptado por la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el 6 de septiembre de 2019 y ratificado en su sesión de 18 de septiembre.

Tercero.- Retrotraer las actuaciones al momento en que debió solicitarse la correspondiente subsanación, teniendo en cuenta que la garantía definitiva depositada inicialmente fue devuelta, que deberá constituirse nuevamente en el plazo otorgado a tal efecto.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativo, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a su notificación. Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Notifíquese al interesado.

Madrid, a la fecha de la firma.
EL DIRECTOR-GERENTE
DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL

Fdo.: Jorge Urrecho Corrales

